



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ  
CORPOURABA**

**Auto**

**“Por el cual se corre traslado para presentar alegatos de conclusión”**

El Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá “CORPOURABA”, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas mediante las Resoluciones 100-03-30-04-0358 del 16 de febrero de 2022 y N° 100-03-10-01-01107 del 30 de septiembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011-CPACA-, en coherencia con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, y

**I. COMPETENCIA**

La Constitución Política de 1991 en su artículo 4º inciso segundo indica que: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades”.

En el artículo 79 que señala que es *deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines*” y en su artículo 80 consagra que:

*“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, **deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.** Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.”*  
(La negrilla es propia).

Que la Ley 99 de 1993 consagra en su artículo 31 las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible destacándose la siguiente Numeral 2º *“...Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...”*

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, se transforma la Corporación Autónoma Regional del Urabá en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA, cuyas competencias entre otras, es la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente de la región del Urabá.

Que, para la protección y conservación del medio ambiente en Colombia, se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental por medio de la expedición de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009.

Que el artículo 1º y 2º de la Ley 1333 de 2009 establece la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, manifestando que le corresponde ejercer esta potestad a las Corporaciones Autónomas Regiones y de Desarrollo Sostenible, entre otras entidades.

**II. HECHOS.**

**Primero.** Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente N° 160-165126-0004-2017, donde obra los siguientes actos administrativos:

- ❖ Auto N° 200-03-50-06-0272 del 21 de junio de 2017, por medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia una investigación ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras disposiciones, versando en su resuelve lo siguiente:

(...)

**"PRIMERO.** Imponer la medida preventiva de **SUSPENSIÓN** de las actividades relacionadas con el entable con cocos, ubicado en las coordenadas Norte 06°41'49.8" Oeste 076°03'23.8", por no contar con licencia ambiental; así como la suspensión de los vertimientos por no realizar tratamiento y no contar con el permiso de vertimiento y concesión de aguas superficiales para el beneficio del mineral, a las siguientes personas:

NOMBRE	CÉDULA
Albeiro González Zapata	70.631.661
Elkin Mauricio Berrio Berrio	71.335.089
Obed de Jesús Serna Gallo	71.181.288
Andrés Felipe Álvarez	1.035.335.467
Johan Andrés Berrio Berrio	1.001.744.199
Álvaro Osorio Sánchez	71.022.722

(...)

**SEGUNDO.** iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de las siguientes personas:

NOMBRE	CÉDULA
Albeiro González Zapata	70.631.661
Elkin Mauricio Berrio Berrio	71.335.089
Obed de Jesús Serna Gallo	71.181.288
Andrés Felipe Álvarez	1.035.335.467
Johan Andrés Berrio Berrio	1.001.744.199
Álvaro Osorio Sánchez	71.022.722

(...)

Acto administrativo notificado personalmente a los presuntos infractores previamente enunciados, tal como se demuestra en las constancias anexadas en el expediente.

- ❖ Auto N° 200-03-50-06-0273 del 21 de junio de 2017, por medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia una investigación ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras disposiciones, versando en su resuelve lo siguiente:

(...)

**"PRIMERO.** Imponer la medida preventiva de **SUSPENSIÓN** de las actividades relacionadas con el entable con cocos, ubicado en las coordenadas Norte 06°44'49.8" Oeste 076°03'24.0" y la operación de una bocamina ubicada en las coordenadas 6°41'48.6" Norte y 076°03'26.3" Oeste, por no contar con licencia ambiental; así como la suspensión de los vertimientos por no realizar tratamiento y no contar con el permiso de vertimiento y concesión de aguas superficiales para el beneficio del mineral, al señor JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ, con CC 94.420855.

## AUTO

" Por el cual se corre traslado para presentar alegatos de conclusión"

3

(...)

**SEGUNDO.** iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ, con CC 94.420855, a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la normatividad ambiental vigente en materia de los recursos agua y suelo..."

(...)

Acto administrativo notificado personalmente al señor JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 94.420.855, el 30 de junio de 2017.

- ❖ Auto N° 200-03-50-06-0274 del 21 de junio de 2017, por medio del cual se impone una medida preventiva y se inicia una investigación ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras disposiciones, versando en su resuelve lo siguiente:

(...)

**PRIMERO.** Imponer la medida preventiva de SUSPENSIÓN de las actividades relacionadas con la planta de beneficio de oro de arrastre artesanal, ubicada en la vereda Popales, municipio de Abriaquí, en las coordenadas 6° 42' 05.1" Norte y 76° 03' 33.9" Oeste, así como de una Bocamina ubicada en las coordenadas 06°41'48.6" Norte y 076°03'26.3" Oeste, por no contar con licencia ambiental; así como la suspensión de los vertimientos por no realizar tratamiento y no contar con el permiso de vertimiento y concesión de aguas superficiales para el beneficio del mineral, al señor OSCAR OSORIO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71023510.

(...)

**SEGUNDO.** iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor OSCAR OSORIO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71023510, a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la normatividad ambiental vigente en materia de los recursos agua y suelo..."

(...)

Acto administrativo notificado personalmente al señor OSCAR OSORIO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.023.510, el 30 de junio de 2017.

- ❖ Auto N° 200-03-50-05-0472 del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se formula un pliego de cargos a los señores ALBEIRO GONZÁLEZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.631.661; ELKIN MAURICIO BERRIO BERRIO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.335.089; OBED DE JESÚS SERNA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.181.288; ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.035.335.467; JOHAN ANDRÉS BERRIO BERRIO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.001.744.199; ÁLVARO OSORIO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.022.722; JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 94.420.855; OSCAR OSORIO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.023.510, por infringir la normatividad ambiental como se constata en el CARGO PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, del enunciado acto administrativo.

Acto administrativo notificado por notificado por aviso, el cual fue publicado en la página web de CORPOURABA [www.corpouraba.gov.co](http://www.corpouraba.gov.co), por el término de cinco (5) días hábiles, con fecha de fijación el 16 de marzo de 2021 y desfijado el 24 de marzo de 2021. Quedando surtida el día 25 de marzo de 2021.

**Segundo.** Se deja constancia que esta Autoridad Ambiental en el artículo segundo de la providencia N° 200-03-50-05-0472 del 16 de diciembre de 2020, concedió el termino de diez (10) días hábiles, para presentar escrito de descargos, acorde con lo indicado en la ley 1333 de 2009, oportunidad procesal que no fue utilizada por los presuntos infractores previamente relacionados

**Tercero.** Que en cumplimiento del Artículo 26 de la ley 1333 de 2009, se el presente procedimiento sancionatorio se abrió a periodo probatorio, tal como consta en el Auto N° 200-03-50-03-0172-2021.

### III. FUNDAMENTO JURÍDICO

La Ley 1333 de 2009 no contempló la etapa de traslado para los alegatos de conclusión, etapas necesarias dentro del procedimiento, y sin las cuales el derecho de contradicción y defensa del presunto infractor resulta menoscabado o casi nulo, pues la única instancia para conocer de las actuaciones en materia probatoria es en la etapa de decisión de fondo.

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 48 contemplo esta etapa, indicando que cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. **Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos.**

Ante esta regulación proferida después de expedida la Ley 1333 de 2009, el catedrático, Álvaro Garra Parra en su texto "Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011", expone que: "De la mayor importancia resulta la inclusión de esta nueva etapa procesal que le permite al presunto infractor, una vez cerrada la etapa probatoria, hacer un análisis de las pruebas, valorarlas y exponer ante la autoridad ambiental las conclusiones de los hechos probados (o dejados de probar, dado que el Estado deberá demostrar la ocurrencia del hecho) y las consecuencias jurídicas que le atribuye; en otras palabras, la Ley 1437 de 2011 reconoció el derecho de contradicción material de la prueba, falencia de la Ley 1333 de 2009 que únicamente permitía la contradicción en el escrito de descargos, pero no con posterioridad a la etapa probatoria que se decreta como consecuencia de los descargos que se presenten, de suerte que luego de la etapa de descargos se podrá abrir a periodo probatorio el procedimiento, pero una vez cerrada la etapa probatoria, la Ley 1333 de 2009 únicamente permitía el análisis de responsabilidad, sin permitir ninguna contradicción por parte del investigado.

A su vez el Consejo de Estado mediante Sentencia Nro. **23001-23-31-000-2014-00188-01 del 17 de noviembre de 2017, expuso que** "La Sala resalta que las garantías integrantes del debido proceso administrativo imponen, ante el vacío que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la aplicación del artículo 47 del CPACA que al tenor indica que «[...] **ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes [...]**», haciendo a su vez aplicable el artículo 48 del CPACA que contempla la etapa de alegatos de conclusión(...) El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado por la doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del artículo 48 del CPACA, en la siguiente forma: «[...] Una enorme falencia de la Ley 1333 de 2009 es el silencio guardado en relación con la etapa de alegatos de conclusión, una etapa que se considera fundamental en este tipo de procesos, pues allí se permite a las partes hacer una valoración de todo lo actuado, antes de que la autoridad proceda a tomar una determinación sobre el particular. Aun así, se entiende que dicha omisión ha sido suplida por la norma general, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, pues en su artículo 48, aplicable a falta de mandato especial, se establece que una vez vencido el período probatorio es obligación de la autoridad dar traslado al investigado por el término de diez días para que presente los alegatos respectivos [...]

Es decir, que, tanto en materia jurisprudencial como doctrinal, se ha indicado e interpretado la norma dispuesta en el Código Contencioso, garantizando el derecho de contradicción y

**AUTO**  
 " Por el cual se corre traslado para presentar alegatos de conclusión"

5

el debido proceso; de ahí la necesidad que las autoridades ambientales dispongan de esta etapa en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental.

**IV. CONSIDERANDO**

Agotada la etapa probatoria consagrada en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad en virtud del principio de integración normativa, derecho a la contradicción y al debido proceso, otorga a los investigados el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para que presente sus alegatos de conclusión

**V. DISPONE**

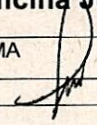
**ARTICULO PRIMERO. –OTORGAR** el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para que los señores **ALBEIRO GONZÁLEZ ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.631.661; **ELKIN MAURICIO BERRIO BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.335.089; **OBED DE JESÚS SERNA GALLO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.181.288; **ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.035.335.467; **JOHAN ANDRÉS BERRIO BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.001.744.199; **ÁLVARO OSORIO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.022.722; **JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 94.420.855; **OSCAR OSORIO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.023.510, presenten sus alegatos de conclusión.

**ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR** el contenido de la presente actuación administrativa, acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 491-2020 a los señores **ALBEIRO GONZÁLEZ ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.631.661; **ELKIN MAURICIO BERRIO BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.335.089; **OBED DE JESÚS SERNA GALLO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.181.288; **ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.035.335.467; **JOHAN ANDRÉS BERRIO BERRIO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.001.744.199; **ÁLVARO OSORIO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.022.722; **JOHN JAIRO ZAPATA FLÓREZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 94.420.855; **OSCAR OSORIO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.023.510, o a sus apoderados legalmente constituido.

**ARTICULO TERCERO.** Indicar que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MANUEL IGNACIO ARANGO SEPÚLVEDA**  
 Jefe Oficina Jurídica

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Johan Valencia		04/05/2022
Revisó:	Manuel Arango		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.